

El laboratorio español del sol ya produce éxitos y mutaciones

Cuando el ministro de Industria, Miguel Sebastián, se reunió a finales de abril con los grupos políticos en busca de un pacto de Estado sobre energía, les presentó un panorama dramático para las renovables y, más en concreto, para la solar fotovoltaica. En 25 años, las primas a las renovables habrán sumado la friolera de 126.000 millones, a razón de más de 5.000 millones al año, les dijo. De este dinero, el 53% fue en 2009 para la fotovoltaica, que sólo aportó el 11% de la electricidad, precisó. Sin embargo, el Gobierno quiere seguir apostando por esta tecnología y hacerle hueco en los objetivos de renovables hasta 2020, concluyó. Éste fue el mensaje de Sebastián. Luego llegaron los rumores. La sección fotovoltaica de la patronal de renovables Appa ya habla de recortes de primas de entre el 20% y el 45% para nuevas instalaciones. Y tanto esta asociación como las otras dos del sector, Asif y Aef, hacen frente común contra la posibilidad de que el Gobierno aplique también un recorte retroactivo, esto es, reduzca las primas a los proyectos que ya las cobran.

A la espera de que se resuelva este ruido regulatorio, resulta innegable que la industria solar española ha sido durante años una referencia internacional y ha superado en ambición a países como Estados Unidos, Alemania y China. Las empresas de aquí gozan de prestigio en el exterior e intentan ahora hacer valer fuera de sus fronteras la experiencia adquirida. No hay duda de que España es un laboratorio mundial para la fotovoltaica y, por una vez, ha renunciado al principio fundacional del "que inventen ellos". De lo que tampoco hay duda es de que la experimentación es dolorosa y un ejercicio de ensayo y error en el que los éxitos vienen a menudo acompañados de alguna mutación indeseada.

La cosa se puso seria en 2007, cuando el Gobierno español aprobó un célebre decreto, el muy mentado 661/2007. A la industria solar le llegó su hora, la oportunidad de convertirse en un laboratorio de trepidante entrada de proyectos e inversiones, y no perdió el tiempo. La potencia instalada se multiplicó año a año hasta acumular 3.500 megavatios fotovoltaicos y situarse en el primer puesto a nivel internacional. Ningún otro país se había mostrado tan veloz en la implantación de esta tecnología, y el caso fue digno de estudio. Al laboratorio español acudieron intrigados y hasta admirados técnicos de Estados Unidos, y el propio laboratorio español sirvió para mejorar la imagen del país en el exterior. No era para menos. Estos 3.500 megavatios fotovoltaicos, cuando logran entrar en producción los días que el sol lo permite, aportan tanta electricidad como tres centrales nucleares.

No obstante, el éxito solar también trajo sus sombras y, con la crisis económica, éstas parecen haberse alargado. Algunas de ellas, las técnicas, como los problemas para integrar la producción en el sistema eléctrico, van camino de resolverse y son la punta de lanza de las empresas del sector: esta tecnología tiene mucho futuro. Otras, las económicas, están en primera línea y, como ocurre con las cosas del dinero, apremian y aprietan. Pocos dudan hoy en día de que la fotovoltaica ha crecido demasiado rápido y a un coste muy alto. Algunos matizan, como Asif y Aef, y acusan al Gobierno del desenfreno, pero en líneas generales casi nadie niega una evidencia: el 661/2007 ofrecía unas ayudas nada desdeñables y, para mayor atractivo, tenía una fecha de caducidad que animaba a una insana carrera especulativa por llegar a tiempo.

La especulación se hizo inevitable y, a finales de 2008 y en plena quiebra financiera internacional, el laboratorio solar español produjo una mutación. En septiembre debía aparecer la norma de reemplazo y los promotores se habían lanzado a presentar proyectos a la carrera para no perderse la prima del 661/2007. Eso generó más especulación, algo de picaresca y, como colofón a este 'sprint' desaforado, un parón posterior en el sector en 2009 que se notó en el empleo.

El Gobierno sustituyó el 661/2007 por un nuevo mecanismo de cupos trimestrales de potencia que atajaba la especulación, pero el problema de fondo seguía al acecho: los 3.500 megavatios fotovoltaicos ya están plantados y tienen derecho a primas durante 25 años. Y además hay que mirar adelante y guardar dinero para pagar la nueva potencia que vaya entrando. Dicho de otro modo, las cerca de 50.000 pequeñas instalaciones solares repartidas por España tienen garantizada una prima que le cuesta cada año al consumidor –las primas se cargan a la tarifa eléctrica-- casi 2.700 millones. Demasiado esfuerzo para un país en crisis con la tijera en alto. Y demasiado dinero para un país que aspira a seguir instalando paneles solares y haciendo bandera de lo verde.

En suma, a lo que se refería Sebastián a finales de abril en su reunión con los partidos era a esto mismo, al paliativo de rigor: hagámoslo, pero más barato. Y las empresas replican que no son ellas las que pusieron una prima generosa, sino que fue el Gobierno el que lo hizo, el mismo que ahora presenta a la fotovoltaica como una tecnología cara e insostenible. Sus portavoces denuncian una campaña de desprestigio y dicen que no son el demonio porque ellos en 2012 habrán aportado 8.200 millones a la sociedad a través de impuestos y ahorro de emisiones, y el demonio no hace estas cosas.

En este baile de cifras cualquier argumento parece avalado. Para eso sirven los números, y los interesados lo saben. Por eso, todos elevan la voz antes del 1 de julio, cuando el Gobierno, si se cumple su propio calendario, tendrá acabado el nuevo Plan de Energías Renovables para los próximos años. Mientras, las empresas españolas como T-Solar, Solaria o Renovalia abren sucursales en Italia, Estados Unidos y otros países, y de reojo miran hacia el Sáhara, hacia el gran vergel solar.

Iñaki de las Heras
24/5/2010